

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., cuatro (04) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Rad: 11001-31-100-30-2021-00090-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES contra el MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL.

ANTECEDENTES

El señor DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES inicia acción de tutela contra el MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL, por considerar que se le están vulnerando el derecho fundamental de petición.

HECHOS Y PRETENSIONES

Sostiene el accionante que ante el juzgado 13 administrativo oral del circuito de Medellín se tramitó proceso de reparación directa contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, en el cual actuó como apoderado judicial de la parte demandante.

Así mismo refiere que se radicó la respectiva cuenta de cobro ante la Entidad hoy tutelada ante lo cual, los demandantes procedieron a revocar el poder otorgado al accionante sin justa causa, motivo por el cual se procedió con un incidente de regulación de honorarios profesionales ante el juez de conocimiento mismo que fue resuelto de forma favorable.

Por lo anterior, indicó que, para lograr la efectiva de la providencia proferida con ocasión del incidente de regulación de honorarios, radicó el 4 de diciembre de 2020 un derecho de petición ante el MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL, sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción constitucional, no se había emitido ningún pronunciamiento por la entidad accionada, situación que afecta no sólo el derecho fundamental de petición sino los principios de economía y celeridad propios del Derecho Administrativo.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Copia de la constancia de radicación del derecho de petición.
- Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del accionante.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 22 de febrero de 2021, se ordenó la notificación de la convocada, para que en término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 22 de febrero de 2021, se notificó al MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- El MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL, brindó contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA.

La entidad accionada refirió: “Sin perjuicio de lo dicho anteriormente este Ministerio atendió la petición de fondo del señor DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES en calidad de peticionario, mediante la remisión del comunicado a través del correo electrónico por el aportado: dieposada@gmail.com, en su escrito de petición. Adjunto la misma.

Así las cosas, resulta diáfana la improcedencia de la presente acción, toda vez que, como se ha señalado con anterioridad el Grupo Reconocimiento Obligaciones Litigiosas ha dado respuesta al derecho de petición interpuesto por el señor DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES, lo que se configura como un HECHO SUPERADO.”

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, el ciudadano DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, el MINISTERIO DE DEFENSA es una entidad administrativa a quien se le aduce vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual

manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94)

Problema Jurídico

Corresponde a esta Juzgadora determinar si la entidad accionada ha vulnerado el derecho fundamental invocado por el accionante, tales como el derecho de petición.

CASO CONCRETO

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela, fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6º, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Sin embargo, la regla general a la cual se ha hecho referencia, presenta excepciones:

a) Cuando el afectado sea un sujeto de especial protección constitucional, como lo son: los niños y las niñas, las personas que sufren alguna discapacidad, las mujeres embarazadas o los ancianos, por cuanto su situación de debilidad manifiesta impone el amparo mayor que la Constitución les brinda y, por ende, el estudio de fondo de sus asuntos.

b) Cuando la vulneración al derecho a la seguridad social implique un agravio a un derecho fundamental como la vida, el mínimo vital o el debido proceso¹.

¹ Sentencias T-905 de 2008, T-850 de 2008, T-1083 de 2001 y T-038 de 1997.

c) Cuando los medios de defensa con los cuales cuenta el accionante, se tornan ineficaces para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos² o se pueda prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable³.

En el caso *sub examine*, se tiene que el accionante elevó ante el MINISTERIO DE DEFENSA- GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL, un Derecho de Petición mediante el cual solicitaba en la resolución que ordene el pago a todos y cada uno de los beneficiarios de la sentencia proferida dentro del proceso 050013333013-2015-00249-00, se disponga la deducción del 30% de la misma con destino a ser cancelados al accionante a título de honorarios profesionales y así mismo se ordenará el pago porcentual de los intereses generados .

De otra parte, a partir de la contestación que remite el MINISTERIO DE DEFENSA y sus anexos, se tiene que conforme al documento anexo No. OFI21-16853 de fecha 24 de febrero de 2021, se acreditó haber dado respuesta a lo petitionado por el accionante, en cuanto a lo solicitado, indicando las razones por las cuales no es viable acceder a sus peticiones.

Así mismo, se evidencia que la respuesta del MINISTERIO DE DEFENSA fue remitida a la dirección de notificaciones indicada por el accionante en el derecho de petición y la presente acción constitucional, según se verifica con la constancia de envío de la indicada comunicación, al correo electrónico dieposada@gmail.com.

Conforme los antecedentes descritos y la documental que obra en el plenario, se pone de presente que no hay lugar a proteger el derecho de petición, toda vez que, conforme con la respuesta dada por la entidad accionada, se permite ver que se dio respuesta a la solicitud elevada por el actor, tema sobre el que la Corte Constitucional ha explicado:

“Esta corporación en reiterada jurisprudencia ha manifestado en relación con el hecho superado, que éste se origina con ocasión de la cesación de la acción u omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, lo que consecuentemente torna improcedente la acción iniciada, pues no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer”. (Sentencia T-173/93).

(...) si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente”. (Sentencia T – 988/02)

² Sentencia T-1268 de 2005.

³ Sentencia T-1083 de 2001.

En este orden de ideas, el Despacho considera que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada contra el MINISTERIO DE DEFENSA. Pese a lo anterior, se ordenará prevenir a la accionada, a fin de que, en lo sucesivo de pronta respuesta de manera clara, precisa y de manera congruente, a las peticiones que se eleven ante ella.

Así las cosas, tenemos que la entidad accionada ha resuelto las solicitudes elevadas por el accionante, por lo que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada, pues no se avizora la existencia de la violación al derecho de petición al haber sido resuelta la petición incoada, por lo que, con fundamento en lo brevemente expuesto, este despacho denegará la tutela impetrada.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor **DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES** por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

b2d3b32581a7887944b671ef8ae23e8c7de34ac4a702ed3a9430698dd3c821d
2

Documento generado en 04/03/2021 06:35:10 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>